

CONTART 2016. La Convención de la Edificación
20 - 22 de abril de 2016; Granada (Spain): Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Granada. Consejo General de la Arquitectura Técnica
de España, p.621-631

ANÁLISIS NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL COORDINADOR/A DE SEGURIDAD Y SALUD

ROBLES IZQUIERDO, ALFREDO NICOLÁS
C&F Ingeniería de la Edificación y Patología; COAATIE de Málaga
e-mail: roiz1678@coaat.es

Palabras clave: coordinador seguridad; accidente; responsabilidad.

RESUMEN

Durante la ejecución de una obra, el accidente de trabajo grave (en determinados casos) y el mortal (en su totalidad), derivan en la búsqueda de las responsabilidades administrativas, civiles y penales de los diferentes agentes o sujetos intervinientes en el proceso constructivo. La determinación de responsabilidades, a instancia de oficio de la Fiscalía especializada o porque junto ésta se ejerza una acción acusatoria particular de los perjudicados, tiene un fin punitivo y/o de resarcimiento indemnizatorio del trabajador.

Algunos de los procedimientos penales concluyen con una sentencia condenatoria sobre el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por determinarse que ha existido causalidad, por acción u omisión, entre el accidente y las obligaciones atribuidas en la normativa a estos sujetos. En consecuencia podemos realizar el estudio y análisis de las sentencias, para determinar cuáles han sido las funciones atribuidas a estos agentes y que obligaciones descuidaron u omitieron, para así comprobar si en el ámbito jurídico hay una correcta interpretación de la normativa y del verdadero trabajo que un Coordinador de Seguridad y Salud tiene asignado en obra.

1. INTRODUCCIÓN

La normativa que desarrolla la Prevención de Riesgos Laborales en general y en particular la específica que es aplicable al ámbito de la construcción, tiene un carácter jurídico-técnico, que la hace en la mayoría de las ocasiones ilegible al ámbito judicial,

que es el encargado de determinar las responsabilidades penales de los diferentes agentes que han intervenido en una obra, en la que se ha producido un riesgo que ha puesto en peligro grave la vida, la salud o la integridad de los trabajadores. Además a esto se le añade la circunstancia de que dicha normativa es de gran abundancia, está muy dispersa, es muy heterogénea y en bastantes ocasiones muy generalista. Así encontramos la Ley y el reglamento que la desarrolla de prevención de riesgos laborales, normas específicas de sectores productivos como el Real Decreto 1627/1997/97 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción [1] (en adelante R.D. 1627), convenios colectivos, normas especificaciones técnicas de condiciones de puestos de trabajo, maquinaria, protecciones, etc.

Los tipos de delitos recogidos en los artículos 316¹ y 317² de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal [2], aplicables en la exigencia de responsabilidades penales en Prevención de Riesgos Laborales, son un buen ejemplo de normas penales en blanco, ya que se remiten a la amplia y dispersa normativa extrapenal de prevención de riesgos laborales, dependiendo de una correcta interpretación de las mismas. Por lo tanto, hay una situación o estado de bastante dificultad, por la imprecisión y extensión de la normativa extrajudicial, al que debe enfrentarse el juzgador, y que dependiendo de su capacidad entendedora de esta normativa técnico-jurídica aplicable, fallará con una sentencia condenatoria o absolutoria.

Pero no solo existe dificultad de comprensión en el ámbito jurídico, sino que ciñéndonos a la funciones del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución desarrollada en la norma, hay diferentes interpretaciones de cómo es su aplicación entre: cada uno de los técnicos competentes que asumen dichas funciones; los técnicos formadores; los colegios y órganos de gobierno profesionales; los autores de libros especializados; etc. Esto no solo es aplicable a las funciones y obligaciones de los coordinadores, sino también a otros aspectos incluidos en las normas de prevención de riesgos laborales.

En la norma extrapenal del R.D. 1627/97 [1], en su artículo 9, es donde se definen las obligaciones y/o funciones principales de los coordinadores de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y que de su incumplimiento se deriva la exigencia de responsabilidad penal para este agente. Puede entenderse como una norma muy generalista en la definición de dichas obligaciones, que puede dar pie a la inconcreción, imprecisión o incomprensión, que provoca una proclividad a la incertidumbre, máxime si existe desconocimiento de lo que es verdaderamente un coordinador de seguridad y el por qué se crea su necesidad en un determinado supuesto. Esto puede generar diferentes interpretaciones en el juzgador.

1. Artículo 316: *“Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.”*

2. Artículo 317: *“Cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por imprudencia grave, será castigado con la pena inferior en grado.”*

2. OBJETIVO

La cuestión que se plantea es si las funciones atribuidas a los Coordinadores de Seguridad y Salud jurisprudencialmente, que se derivan de las sentencias condenatorias, son coincidentes con las funciones recogidas en la legislación de prevención de riesgos laborales, que definen el verdadero trabajo que tienen atribuido estos agentes en las obras de construcción; y de no ser coincidentes, preguntarse cuáles son los factores que están determinando esta situación de discrepancia entre ambos órdenes, el jurídico y el normativo.

3. METODOLOGÍA

Se realiza un estudio en dos accidente de trabajo de las causas, los fundamentos de la acusación al coordinador de seguridad y del fallo de la sentencia. Se contrasta las funciones y responsabilidades, cuya omisión le requieren una responsabilidad penal, con aquellas exigidas por la normativa. También se analizan varias sentencias firmes condenatorias y su repercusión jurisprudencial sobre las responsabilidades de los coordinadores de seguridad y salud. De la experiencia personal en la peritación de accidentes de trabajo, se analizan los factores que pueden determinar la posible desviación de los criterios entre ambos órdenes.

3.1 ACCIDENTE 2. JUICIO ORAL 458/10 JUZGADO DE LO PENAL Nº 11 DE MÁLAGA

El accidente ocurre en una obra de un edificio donde el promotor fue contratando a diferentes contratistas para cada parte de la obra; Movimiento de tierras, cimentación, estructura, etc.

El coordinador de Seguridad ejerció una labor escrupulosa en la entrada y salidas de cada una de estas empresas, con la aprobación de sendos planes de seguridad, dio instrucciones en el libro de incidencias, y un seguimiento demostrado de la obra con reuniones y visitas ejerciendo sus funciones.

El accidente ocurrió, cuando dos trabajadores desarrollaban tareas de pintura en el sótano -1 de la obra. Los trabajadores llevaban toda la mañana trabajando en la misma zona pero en sitios distintos. Uno de los trabajadores por descuido y por no advertirlo se precipitó por un hueco existente entre las dos plantas de sótano sin que su compañero lo viese, pues estaba retirado unos 30 metros recogiendo los utensilios para marcharse. El hueco por el que el trabajador cayó tenía como protección unos tablones de madera y en el momento del accidente se encontraba abierto en todo o parcialmente.

En concreto a la protección del hueco por el que cayó el trabajador el coordinador dio instrucciones concretas sobre su protección. Hubo un incumplimiento de las instrucciones del coordinador de seguridad por estar levantada la protección del hueco.

Acusación de la Fiscalía

El Ministerio Fiscal basa la acusación del coordinador de seguridad en que éste autorizó la retirada del mallazo y los tablones que cubrían los huecos para facilitar las labores de hormigonado, pero con posterioridad finalizadas aquellas no visitó el lugar

para comprobar que las protecciones habían sido adecuadamente restablecidas para proteger los huecos conforme a las previsiones del Estudio y el Plan de seguridad. Con ello posibilitó el comienzo de los trabajos de pintura en esa zona en condiciones a todas luces inseguras sin exigir antes el acondicionamiento de la misma para garantizar el trabajo seguro de los pintores. Además consintió la ejecución del trabajo por los mismos pese a que no habían sido informados de los huecos existentes y en el caso del accidentado, sin haber recibido la formación necesaria y exigible.

El Ministerio Fiscal calificó los hechos como constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores del art 316 y 318 C.P en concurso con un delito de lesiones imprudentes del art 152.1. 2 (en relación con el artículo 149) C.P, reputando autores a los acusados y solicitando las penas de 2 años y 6 meses, inhabilitación especial para derecho de sufragio pasivo e inhabilitación para el ejercicio durante el tiempo de la condena e indemnización de 378.000 .

Juicio y Sentencia

En el acto del juicio oral y antes de procederse a la práctica de la prueba propuesta por las partes, el Ministerio Fiscal, las acusaciones particulares y la defensa, con la conformidad manifestada por el acusado presente en dicho acto, solicitaron del Tribunal que procediese a dictar sentencia de conformidad con la acusación formulada en el acto del juicio en la que el Fiscal modificó sus conclusiones provisionales, calificando los hechos como delito de lesiones imprudentes del 152,3 en relación con art 140, y el delito contra la seguridad de los trabajadores se califica en su forma de comisión imprudente, introduciendo el Art. 316, y pidió por el delito de lesiones seis meses de prisión, y por el segundo seis meses de prisión y multa de 3 meses con cuota diaria de seis euros, y suprimió la pena de inhabilitación especial para ejercicio de actividad constructiva y de dirección facultativa, concretando la responsabilidad civil en 180.000 euros.

Se le reconoce su responsabilidad penal, como consecuencia de la asunción de responsabilidad personal del coordinador de seguridad por acuerdo previo con el Ministerio Fiscal.

3.2 ACCIDENTE 2. JUICIO ORAL 164/2011 JUZGADO DE LO PENAL Nº 3 DE MÁLAGA

Se trata de una obra con estructura metálica con la cubierta realizada en paneles sándwich de chapa metálica y alma de poliuretano de 12,00 x 1,20 m. Dos trabajadores subidos encima de la cubierta y con el auxilio de una grúa móvil, estaban trasladando el resto del material utilizado (paneles, chapas, piezas especiales de remate, etc.), a otra zona de la obra.

Plan de Seguridad

Existía un anexo al plan para los trabajos de cubierta que desarrolla el método de trabajo de la ejecución de la misma con los paneles, identifica y evalúa los riesgos, se establecen las medidas preventivas asociadas a los riesgos identificados y protecciones colectivas e individuales para los trabajos a realizar.

El accidente según la inspección

El inspector de trabajo visitó la obra un mes después del accidente (el lugar del accidente había cambiado).

El inspector de Trabajo describe que los trabajadores en el momento en el cual se dispusieron a manipular unas chapas metálicas con espuma de poliuretano inyectado, con la finalidad de acumularlas en un paquete, chapas que tiene las medidas aproximadas de 12m de largo y 1,10 de ancho en su compactación, siendo un número de 13 que hacían un total de 700 Kg. Además del peso de los 2 trabajadores los que habían de colocarse encima de las correas de la cubierta (normalmente son 5 chapas o correas) para de esta forma darle mayor consistencia, evitando colocarlos encima de los paneles. Uno de los trabajadores se encontraban moviendo el paquete a uno y otro lado de la cubierta, en vez de depositarlos encima de la correa lo dejara encima del panel el cual posteriormente por la excesiva carga acumulada desmoronó está cayendo tanto chapas como el trabajador deslizándose por la apertura del panel cayendo a un forjado intermedio situado 5 m del lugar de caída, quedando el compañero enganchado en el otro lateral del panel que evitó la caída.

El accidente según el informe pericial encargado por el Coordinador de seguridad

El relato del Inspector de trabajo no es verosímil pues no es posible que un paquete de 13 paneles colocados sobre la cubierta pueda producir la rotura de un solo vano (es decir, una cuarta parte del panel, 1'10 m x 3'00 m), ya sea porque descargue siempre en cuatro o cinco correas, porque colocado entre correas siempre descarga en 12 paneles de cubierta siendo la carga que gravita sobre uno de ellos 3'8 veces menor que la admisible, o simplemente porque es imposible que se deforme un solo panel sin que lo hagan los once restantes. Ver Figuras siguientes.

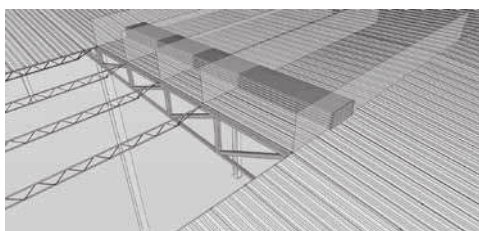


Figura 1.

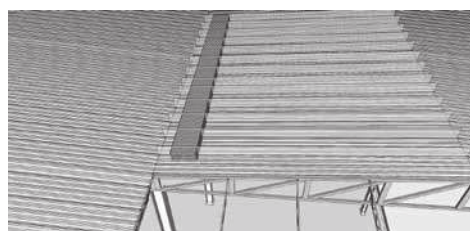


Figura 2.

Los trabajadores estaban manejando un paquete de piezas especiales de chapas de remate de la cumbrera; en el manejo del paquete se estaba utilizando una grúa y los trabajadores apilaban sobre el paquete las chapas que fueron encontrando alrededor de donde se situaba el paquete en origen, y una vez que estaba completo lo eslingaron utilizando una cuerda (había eslingas) y lo transportaron con la grúa a la nueva ubicación. Cuando estaba situando el paquete en la vertical del lugar donde lo iban a colocar, se debió romper la cuerda o soltar de la grúa e impactó sobre el panel de la cubierta

doblándolo y deformándolo por la fuerza de impacto hasta que perdió el apoyo. Así, se inclinó el panel deformado hacia el interior, que a modo de rampa sirvió de vehículo para que el paquete de chapas deslizara y cayera hacia el interior colisionando con el canto del forjado y después cayendo al suelo. Detrás del paquete de chapa se deslizó el trabajador que al tener menor rozamiento fue lanzado en su caída parabólica más lejos, alcanzando el forjado intermedio.

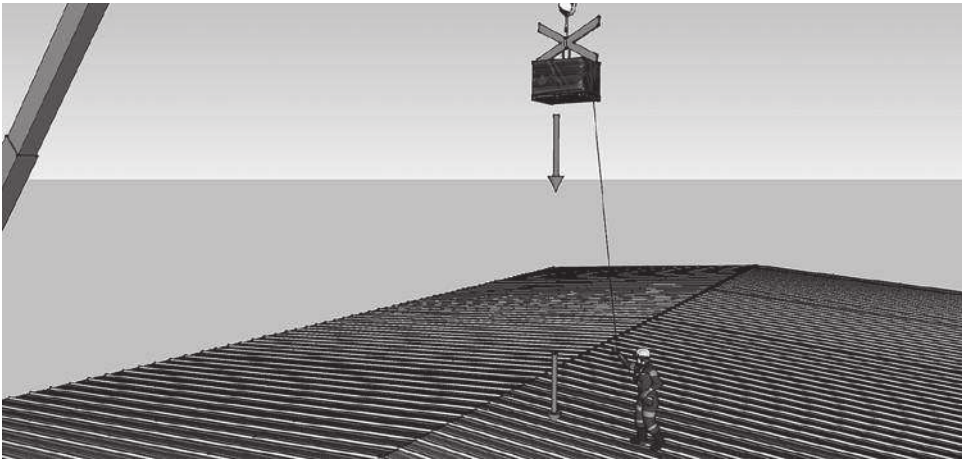


Figura 3.

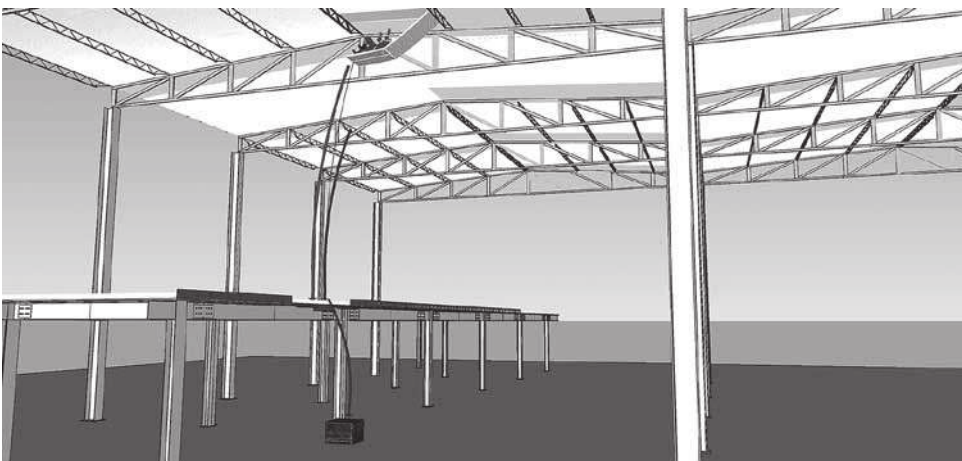


Figura 4.

Acusación de la fiscalía

El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones provisionales, calificó los hechos como constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores del art 316 y 318 C.P en concurso con un delito de lesiones imprudentes del art 152.1 C.P, reputando autores

a los acusados y solicitando las penas de 2 años de prisión, multa de 10 meses a 10 euros, inhabilitación especial para derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Indemnización de 12.000 euros.

Juicio y Sentencia

El Ministerio Fiscal tras la práctica de la prueba modificó sus conclusiones en el sentido de entender que los hechos eran constitutivos de una falta del art 621.3 C.P. solicitando la pena para cada acusado de 30 días de multa con cuota diaria de diez euros, y responsabilidad civil conforme al acuerdo alcanzado y puesto de manifiesto por las partes como cuestión previa

Aunque En definitiva, siendo los hechos en su caso constitutivos de falta del art 621.3 C.P. la responsabilidad penal se encuentra prescrita conforme a los arts. 130 y 131 C.P., procediendo la libre absolución de los acusados.

Aunque en este caso por una formalidad se absuelve al coordinador de seguridad y salud, si se le reconoce su responsabilidad penal, como consecuencia de la asunción de responsabilidad personal del coordinador de seguridad por acuerdo previo con el Ministerio Fiscal.

3.3 OTRAS SENTENCIAS

En las siguientes sentencias se abre una vía jurisprudencial atribuyendo funciones de vigilancia y supervisión hasta el extremo de exigir la presencia casi constante o ser como un delegado del empresario. En este sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial (en adelante SAP) de Barcelona de 28 de octubre de 2005 al señalar que: “Como se desprende, entre otros, de los art. 9, 10, 11 y 14 del RD 1627/1997, y del art. 1.A.3 del D 265/1971, corresponde al coordinador de seguridad el deber de vigilar que se proporcionen y se utilicen correctamente las medidas de protección individual y colectiva de los trabajadores. Es evidente que el coordinador de seguridad no puede vigilar a cada uno de los trabajadores, pero es igualmente evidente que el hecho de que el coordinador de seguridad no impida que se realicen labores de encofrado en la tercera planta del edificio sin las oportunas medidas de protección colectiva, comporta la infracción de una norma esencial de cuidado (...) porque la figura del coordinador de seguridad comporta una disminución de la diligencia que se exige a otros sujetos para controlar los riesgos que amenazan a los trabajadores”. **También la SAP de Madrid de 8 de marzo de 2006, la cual asevera que:** “Como dicen las SAP Sec. 2ª Castellón 8 de enero de 2003, y SAP Sección 1ª Guadalajara de 17 de enero de 2003, es responsable legalmente de velar por la seguridad en la obra, cuyo nivel de cumplimiento en materia de seguridad laboral está obligado por Ley a conocer y, en este sentido, a facilitar hasta el punto de estar facultado a paralizar los trabajos tan pronto detecte el incumplimiento”. **También la SAP de Tarragona de 6 de marzo de 2009, en la que se afirma que:** “En efecto y como coordinador de seguridad, la tarea de dicho profesional no era únicamente la de redactar el estudio de seguridad y coordinar las distintas actividades concurrentes y dar las órdenes e instrucciones oportunas como él mismo sostiene, sino que debía velar por su correcta aplicación,

*teniendo incluso facultades para detener los trabajos si observaba que las medidas de seguridad correspondientes no se habían adoptado, pues debe controlar y verificar que los trabajos se desempeñan en condiciones de seguridad adecuadas. El acusado, que según admitió visitaba frecuentemente la obra aun cuando no lo hiciera el día del accidente, sino tres o cuatro días antes, debió percatarse de la ausencia de medidas de seguridad individuales y concretamente comprobar si en efecto se habían colado los arneses de seguridad junto a la zona destinada a carga y descarga, así como si el aparato elevador reunía las condiciones adecuadas, lo que evidentemente no hizo, pues como él mismo reconoció en el acto del plenario, ni siquiera sabía si la marca del elevador utilizado estaba dotado de limitador de capacidad de carga, siendo por tanto evidente su responsabilidad, pues solo mediante su control y comprobaciones se pudo evitar la omisión del empresario desatendiendo su obligación de garante (...) su obligación no era simplemente redactar el estudio de seguridad y aprobar el plan, sino también la de comprobar, por lo que aquí interesa, si los elementos de fijación, anclaje y soporte de los aparatos elevadores que había en la obra eran de buen diseño y construcción y si tenían resistencia suficiente para el uso al que estaban destinados lo que, como hemos dicho, no consta que hiciera antes ni después de producirse el accidente”. O también SAP de Álava, Sec 2ª de 14-3-2008 que dice “Resulta indudable la **posibilidad de atribución de responsabilidad penal a los coordinadores de seguridad, que se configuran como verdaderos delegados del empresario en materia de prevención de riesgos laborales**, ya que legalmente tienen atribuidas funciones en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra (art. 3 R.D. 1627/1997, de 24 de octubre”.*

En las siguientes sentencias se abre una vía jurisprudencial contraria a la anterior, atribuyendo funciones de coordinación en la concurrencia de actividades y empresas para disminuir los riesgos, no estando obligado a supervisar o vigilar el cumplimiento de todas las medidas de seguridad de la obra. En este sentido la SAP de Madrid de 1 de febrero de 2006, cuando afirma con rotunda claridad que: “Sus funciones son de estricta coordinación (...). Las tareas del coordinador no se refieren a la concreta ejecución y supervisión de las medidas de seguridad, sino, precisamente, a la coordinación (...) Se muestran así con claridad los distintos planos en los que se distribuyen las responsabilidades de los intervinientes en la obra: la del coordinador se centra en coordinar las distintas actividades concurrentes (además de distintos sujetos empresariales) y dar a éstos órdenes e instrucciones; la de los contratistas, a los que corresponde aplicar los principios de prevención, cumplir y hacer cumplir las medidas dispuestas en el plan de seguridad”. También la SAP de Badajoz de 3 de junio de 2008, al declarar que: “Tal atribución de responsabilidad al arquitecto técnico parte de la creencia, equivocada legalmente, de que, a tenor de los arts. 9 y siguientes del RD 1627/1997 (...), el “coordinador de seguridad y salud” (...) ha de responder de la aplicación, práctica y determinada, y constante, cabría añadir, de las medidas de seguridad que vengan establecidas para la obra de que se trate. Sin embargo, como la sentencia examinada pone de relieve, es el contratista quien ha de elaborar su plan de seguridad y salud en el trabajo (...) y el art. 11 (del citado RD) obliga al contratista, y no a otro, a cuidar del control periódico de las instalaciones y dispositivos de prevención de los riesgos laborales, y a cumplir, y a hacer cumplir, a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud, todo ello ya directamente, ya con el concurso de empresas especializadas, como sucede en el caso. De

*donde que, teniendo en cuenta además la definición de tareas del coordinador de seguridad y salud contenida en el art. 9 RD, entre las que no aparece ninguna que dé pie a la atribución a dicho coordinador de responsabilidad por daños corporales derivados de accidente laboral, esta clase de responsabilidades haya de asignarse exclusivamente al contratista o a la empresa a quien haya encargado del control de la seguridad laboral (cfr., por ejemplo, SAP Baleares 4.ª de 29 de noviembre de 2006)". O También SAP de Barcelona Sección 8ª, de 22 de noviembre "El mentado aparejador (que era el **Coordinador de Seguridad** de la construcción, **aprobó el plan de seguridad de la obra** por lo que cumplió con las obligación que le impone el apartado b) del art. 9 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, sin que por otro lado, ni ese Real Decreto **ni ninguna otra norma legal le imponga la obligación de controlar directamente que los trabajadores apliquen los métodos correctos de trabajo pues ello no solo devendría imposible por elementales razones físicas de ubicuidad en tanto que una persona no puede estar simultáneamente en distintos lugares, sino que además entraría en contradicción con el apartado e) de este mentado precepto, en que se impone la obligación de "coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo, pero no el control directo sobre esa correcta aplicación de los métodos de trabajo"**.*

Una última vía jurisprudencial se abstrae del debate sobre las funciones y las competencias genéricas y se centra en valorar si la actuación u omisión del coordinador de seguridad han sido relevantes en la casualidad del accidente. SAP de Madrid, 20 julio de 2006 que fundamenta en tal omisión la condena *"En resumen el Plan de seguridad era, a los efectos que nos interesan una pura formalidad sin contenido real. Con esta conducta emisiva se puso en peligro, no solo la vida de las dos víctimas, sino la vida e integridad de cualquier trabajador que utilizaba la plataforma, bienes jurídicos acechados por un peligro grave". O la sentencia firme absolutoria del J. Penal de Motril Nº 1 85/2012, de 8 de marzo en base al contenido del anexo al plan de seguridad y las reuniones de coordinación celebradas* *"Tal planta de hormigonado contaba con un **anexo específico en materia de seguridad, en materia de prevención** y además en el momento concreto de avance de la cimbra por las inmediaciones de la planta de hormigonado se adoptaron medidas preventivas específicas para evitar situaciones de riesgo tales como diversas y variadas redes, delimitación de la zona para camiones y personal, confección de un marco metálico en la caseta para protección, personal de paso, establecimiento de rodapiés, modificaciones del sitio de lavado de las cubas de hormigón.... Existiendo incluso **actas relativas a la coordinación de seguridad sobre tal extremo**".*

4. RESULTADOS

Como hemos visto de un mismo texto legal, el artículo 9 del RD 1627/97, donde se especifican las funciones y responsabilidades de los coordinadores de seguridad en obra, se obtienen diferentes interpretaciones e incluso contradictorias en varios de los preceptos. El hecho de que la norma no esté redactada con la suficiente claridad, hace que exista divergencia en su interpretación no solo en el ámbito jurídico **sino también en el propio de los técnicos.**

5. CONCLUSIONES

Estas discrepancias se deben principalmente a que los preceptos del Código Penal artículos 316 y 317, específicos y aplicables a los agentes causantes de los daños a los trabajadores en la realización de su trabajo, tienen un carácter de tipo **penal en blanco**, esto es, que para determinar la conducta punible hay que acudir necesariamente a las normas que regulan la prevención de riesgos laborales, para así concretar los incumplimientos aplicables a las situaciones que se han dado en el accidente y fijar las responsabilidades atribuibles a cada uno de los agentes; entre ellos los coordinadores de seguridad y salud. Las normas que regulan la prevención de riesgos laborales en nuestro ordenamiento jurídico son extensas, complejas y de características jurídico-técnico, que las hacen de difícil comprensión en el ámbito jurídico.

En el desarrollo de los procedimientos penales instados por los accidentes, desde su instrucción hasta la práctica de la prueba del juicio oral, se encuentran algunos factores que contribuyen junto con la complejidad de la normativa de prevención de riesgos laborales, a que se le exijan jurídicamente responsabilidades penales a los coordinadores de seguridad, por la acción u omisión de funciones que verdaderamente no le son atribuidas a estos agentes en las normas de referencia. Una lista no exhaustiva de estos factores podía ser:

La realización de informes de investigación del accidente, desde un punto de vista técnico poco riguroso y muy generalista en la determinación de las causas y medidas correctoras. Por lo general, esta situación es consecuencia del desconocimiento técnico de los procesos de ejecución de obra de los redactores de estos informes.

La utilización de estos informes de investigación de accidentes, que no reúnen los requisitos esenciales, por parte de la Inspección de Trabajo en la investigación de los accidentes y en la redacción de las actas de infracción. Los Inspectores de Trabajo aplican su opinión sin conocimientos especializados en los procesos técnicos de ejecución y en los procedimientos preventivos aplicables. Además muchas de las inspecciones a los lugares de los accidentes están realizadas a destiempo, con las condiciones del lugar cambiadas.

El que la fiscalía, se base en actas de infracción de la Inspección de Trabajo con falta de rigurosidad, para la solicitud de la responsabilidad penal.

La utilización de la fiscalía como testigos peritos a los Inspectores de Trabajo.

La asunción de la responsabilidad penal de los coordinadores de seguridad, sin corresponderle, en la negociación con el Ministerio Fiscal con rebaja de la condena, por miedo a entrar a la cárcel.

La aplicación de los criterios de la Fiscalía General del Estado basados en una jurisprudencia distorsionada, por parte de la fiscalía Especializada en Siniestralidad Laboral.

La asunción deformada que van adquiriendo los jueces, sobre las funciones de los coordinadores, que inevitablemente tiende a convertirse en “legislador” (porque al final presuponen funciones que las normas no asignan a los coordinadores)

Por lo tanto existe una necesidad para que se unifiquen los criterios técnicos con los jurídicos, y por ello se debe estudiar la situación real con la mayor rigurosidad para poder evaluar la situación, como punto de partida a las actuaciones encaminadas a unificar y a precisar las funciones de los coordinadores.

Dentro de las recomendaciones que se pueden derivar en la confirmación de las hipótesis planteadas, podían estar entre otras las siguientes:

Realizar un estudio estadístico más amplio de la jurisprudencia, de la desviación sobre las normas y de los factores que están contribuyendo a ello, para que sirva de fundamento en las siguientes acciones.

Aunar el criterio técnico entre los profesionales de cuáles deben ser las funciones de los coordinadores basados en el mandato de la norma, fomentando reuniones, elaborando manuales y guías, etc.; formando grupos de trabajo a tal fin y todo ello liderado por los Consejos y los Colegios de la profesión, junto con la administración, empresarios, sindicatos y el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Divulgar en el ámbito jurídico mediante conferencias u otros medios, cual es el trabajo de un Coordinador de Seguridad durante la Ejecución de obra y cuál es el fin por el que se crea esta figura.

Instar al legislador desde el sector representado por todos los estamentos implicados en el sector de la construcción, que se aprueben los preceptos o reformas legales para clarificar, en el caso que nos ocupa de los Coordinadores de Seguridad durante la ejecución y del resto de los agentes, los textos aplicables, para que el juzgador pueda interpretarlas sin equivoco y de forma unificada, para evitar la situación actual donde se están creando jurisprudencias contrarias.

Divulgar entre los profesionales mediante conferencias u otros medios, los criterios debatidos de actuación de los coordinadores de seguridad en las obras.

Fomentar la necesidad de especialización en los procesos y métodos de trabajo, de aquellos técnicos de prevención de riesgos laborales, que realicen informes de investigación de accidentes ocurridos en obras de construcción. Así mismo divulgar la formación o información adecuada, de los criterios formales válidos que deben recoger los informes de investigación; ya que no solo se trata de informes para dar respuesta a un trámite o ser instrumento para la mejora de la prevención en las empresas, sino que tienen añadida una repercusión que acarrea situaciones injustas en la reclamación de las responsabilidades penales de los agentes intervinientes en el proceso constructivo; entre los que se encuentra el Coordinador de Seguridad.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE núm. 256, 25 octubre 1997, pág. 30875 a 30886.
- [2] Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. BOE núm. 281, de 24 de noviembre de 1995, páginas 33987 a 34058.